



La consulta plantea determinadas cuestiones relacionadas con la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, al supuesto que plantea, referido a la instalación de cámaras de videovigilancia en la zona de acceso a centros penitenciarios.

Según indica la consulta, el objeto de las grabaciones sería la zona indicada, por lo que quedarían reflejadas en aquéllas “la entrada y salida de funcionarios, familiares de internos, abogados, proveedores e internos en salidas de permisos y libertades, principalmente”. Se añade que “al estar ubicados los lectores de fichaje en una de las paredes de dicho hall también se visualizarían los mismos”. Hecha esta descripción, la consulta plantea si “a la vista de las funciones de seguridad y control” que se realizarían a través del sistema sería de aplicación al caso la excepción establecida en el artículo 2 c) de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual “el régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en la presente Ley Orgánica no será de aplicación (...) a los ficheros establecidos para la investigación del terrorismo y de formas graves de delincuencia organizada. No obstante, en estos supuestos el responsable del fichero comunicará previamente la existencia del mismo, sus características generales y su finalidad a la Agencia de Protección de Datos”. Ello exige analizar el alcance que puede otorgarse a la citada excepción, teniendo esencialmente en cuenta que la Ley Orgánica 15/1999 viene a regular las garantías del derecho fundamental a la protección de datos de carácter persona, reconocido en el artículo 18.4 de la Constitución, tal y como ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional, por lo que la interpretación de una norma que implica la exclusión de ese marco protector debe en todo caso realizarse de forma restrictiva.

Tomando en cuenta el tenor del precepto al que se está haciendo referencia sería posible tener en cuenta distintos criterios interpretativos, tales como entender, en un sentido extenso que cualesquiera ficheros que permitieran colaborar en la lucha contra el terrorismo o la delincuencia organizada, incluso aun cuando contuvieran datos que coadyuven a dicha finalidad de un modo excepcional o accidental podrían incluirse en el precepto, siendo esta la tesis que parece plantearse en la consulta.

Por el contrario, una interpretación garantista de la norma exigiría que únicamente pudiesen ser incluidos en la excepción los ficheros cuya finalidad fuera, precisamente la investigación del terrorismo y de formas graves de delincuencia organizada.



Esta interpretación parece, a nuestro juicio la más ajustada al tenor de la norma, dado que, en primer lugar, se hace referencia en la excepción del artículo 2.2 c) de la Ley Orgánica a los ficheros establecidos para esta finalidad, lo que parece vincular la finalidad a la existencia misma del fichero, sin perjuicio de que el mismo pueda incorporar información de otros ficheros, estos sí sometidos a la Ley Orgánica.

En segundo lugar si cualquier fichero que, incluso incidentalmente, pudiera contener información que afectara a la investigación del terrorismo y de formas graves de delincuencia organizada se generaría un elemento de inseguridad jurídica en que no sería posible conocer a priori qué ficheros están o no están incluidos en la excepción.

Finalmente, la interpretación extensiva que se ha señalado vaciaría, en gran medida, de contenido, el establecimiento de normas específicas reguladoras del tratamiento de datos con fines de investigación policial, y particularmente, el artículo 22.2 de la Ley Orgánica 15/1999, a cuyo tenor “La recogida y tratamiento para fines policiales de datos de carácter personal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin consentimiento de las personas afectadas están limitados a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, debiendo ser almacenados en ficheros específicos establecidos al efecto, que deberán clasificarse por categorías en función de su grado de fiabilidad”.

Fijado el criterio de la finalidad del tratamiento y del fichero creado como el que ha de ser tomado en consideración para que proceda la aplicación de la excepción establecida en el artículo 2.2 c), esta conclusión conduce a una segunda consecuencia, que es la de que el responsable del fichero debe ser aquél a quien la Ley atribuye la función de investigación de las formas delictivas a las que se ha hecho referencia, lo que excluiría de la aplicación del artículo a los ficheros de los que pudiera ser responsable la consultante, a la que no se atribuye tal competencia.

Pero es que, además, la consulta pone de manifiesto que la información recogida por las cámaras incluiría a una pluralidad amplísima de personas entre las que se incluirían cualquier interno del centro como consecuencia de la condena por la comisión de cualquier delito, sea o no grave y aparezca o no vinculado con el terrorismo o la delincuencia organizada, los familiares de cualquiera de ellos, los empleados del centro, incluso cuando realizan la actividad sometida a control horario e incluso cualquier otro visitante o proveedor, lo que aleja inmensamente el fichero de cualquier función relacionada con la investigación del terrorismo y formas graves de delincuencia organizada, sin perjuicio de que eventual y excepcionalmente algún dato aislado pudiera colaborar en el logro de tal finalidad por quienes tienen atribuidas esas competencias de investigación, cuyos ficheros, a los que pudiera añadirse ese datos como consecuencia de la propia aplicación de la



Ley Orgánica 15/1999, pudieran en su caso encontrarse sometidos a la excepción.

En consecuencia, ni atendiendo a la finalidad del fichero, ni a la naturaleza de su responsable ni a las personas que son objeto de grabación los ficheros a los que se refiere la consulta pueden considerarse incluidos en la excepción del artículo 2.2 c) de la Ley Orgánica 15/1999, quedando íntegramente sometidos a la misma y, en particular, dada su naturaleza, a la Instrucción 1/2006 de esta Agencia.